

Hacia una Nueva Relación con la Minería

Algunos puntos a considerar si es que se quiere una convivencia armónica entre minería, sociedad y Estado a futuro.

Lo ocurrido recientemente con el proyecto minero Conga en Cajamarca nos debe llevar seriamente a la reflexión. Los hechos que han rodeado la paralización del proyecto minero nos dejan un balance negativo: ciudadanos inconformes, manifestantes y policías heridos, toma de carreteras y el estancamiento de la vida social y económica del departamento por más de un mes. Y el saldo por lamentar pudo ser mucho peor.

Cuando el diálogo no rinde sus frutos, hay que evaluar qué está fallando en la relación de las partes en conflicto. A continuación, algunos puntos necesarios de considerar si se quiere una relación armónica entre minería, sociedad y Estado a futuro.

Importancia del Sector

Hay que dejar en claro el papel clave que juega la actividad minera en la economía peruana. Siendo pragmáticos, las cifras no mienten. El sector minero es responsable nada menos que del 63% de nuestras exportaciones totales y representa más del 6% de la producción general del país. Asimismo, la recaudación tributaria del sector equivale casi al 25% de la recaudación global del Estado; es decir, nada menos que la cuarta parte de los ingresos estatales. Y el sector vive además en auge permanente, incrementándose en promedio desde 2001 5.6% anual. Nuestra economía crece a su ritmo.

Estas cifras son resultado del precio internacional de los metales. Actualmente, el oro se encuentra en US\$ 1,430 por onza, el cobre en US\$ 4.27 por libra y la plata en US\$ 37.35 por onza. Ello explica el continuo crecimiento y expansión del sector. En el lapso que va de 2007 a 2010, solo la gran minería arrojó utilidades por US\$ 17,000 millones. Y en cuanto a los ingresos fiscales, con la nueva reconfiguración del esquema tributario minero, este año se espera recaudar una cifra superior a los US\$ 2,000 millones. Se hace así evidente la necesidad económica de contar con el desarrollo



del sector, no solo en términos de recaudación, sino en función de la producción, comercio y empleo.

Si además consideramos que en el presente quinquenio las grandes empresas planean invertir más de US\$ 30,000 millones solo en nuevos proyectos, principalmente en Cajamarca y Apurímac, y que hay una suma de US\$ 42,500 millones en planes dentro de todo el sector, entonces sí que debe preocuparnos la actual coyuntura del sector minero y su evolución. Cuantitativamente hablando, pero también cualitativamente, los principales proyectos, como Conga, Michiquillay o La Granja, representan puntos claves en los que el sector medirá su crecimiento a futuro, y junto con él toda la economía peruana.

Esas son también las conclusiones de un importante estudio presentando por el Banco de Crédito del Perú en diciembre pasado. Sus conclusiones son: (a) la economía peruana viene creciendo más que sus pares regionales, (b) la inversión privada ha sido clave en ello, (c) en los próximos años, la inversión en minería concentra parte importante del dinamismo que mostrará su economía y (d) para lograr inclusión social se debe crecer. Por ello preocupan los recientes eventos vinculados al sector, más aún ante la preocupante situación financiera mundial, que puede repercutir en nuestra economía, que es fuerte pero no inmune, por lo que debemos mantener la solidez en sectores que han permitido que crezcamos a los niveles actuales. Es por todo eso que debemos seguir apostando por generar una minería responsable y adecuada.

Convirtiendo los Riesgos en Oportunidades

Si bien es necesario seguir apostando por la minería, esta tiene que ser responsable. Es necesario ir hacia otra relación entre la empresa y su medio, que no repita los errores del pasado. Eso requiere la adecuada participación de los distintos agentes involucrados en el tema, comenzando por la propia empresa. Los procesos trunco del pasado nos demuestran que ha habido



distintas fallas en las instituciones del Estado en las zonas de conflicto, pero que también las empresas involucradas pudieron hacer las cosas mucho mejor.

Pero ¿cómo se logra? Al respecto, hay algunos puntos claves a considerar. El primero de todos es la cuestión del estándar ambiental, que hoy en día resulta fundamental para comenzar cualquier proyecto. En ese sentido, el agua es sin duda el elemento más importante a la hora de determinar ya no el futuro de las actividades económicas, sino de la vida misma. Hoy, en un contexto de cambio climático con secuelas negativas, los conflictos empiezan a girar cada vez con mayor frecuencia en torno a este recurso. Por eso, cualquier proyecto minero que busque transformar o utilizar el agua de un lugar requiere tecnología de última generación para minimizar y compensar los impactos dañinos, lo que no solo significa compensación pecuniaria, sino principalmente un esquema de gestión del agua misma, que permita su uso racional y autosostenible.

El otro paso que resulta fundamental es una relación adecuada entre la empresa y las comunidades o grupos sociales aledaños a la zona del proyecto. Es decir, se requiere una gestión social seria y profesional, por lo cual las empresas mineras deben contar con una plana especializada en trabajo social y proyectos comunitarios. De esta forma, a través de los programas sociales que impulse o con la capacitación técnica que brinde a los pobladores, crea sinergias con el medio donde se desenvuelve. Así, ganará en legitimidad social, de tal forma que cuando comience la etapa de operaciones

tendrá toda la viabilidad social que requiera para cumplir sus objetivos económicos.

Pero sin duda el tercer paso es el más complicado: concertar con los otros actores involucrados. La empresa debe repartirse el liderazgo respecto a la agenda de prioridades del proyecto, sea con el Estado —a través del Gobierno central y de las autoridades locales— o sea con las organizaciones sociales del lugar. Es inevitable. Como bien señala la consultora Metis Gaia, una iniciativa de este tipo supone todo un reto debido a la presencia de un grupo variopinto de actores en las negociación —incluso agentes políticos problemáticos—, y requiere desarrollar competencias y alinear incentivos a fin de que se trabaje en colaboración. Aunque un liderazgo distribuido es un riesgo para la empresa en el corto plazo, es una excelente oportunidad para sentar las bases del trabajo a futuro, pues concertar con los distintos sectores e involucrarlos con el proyecto permitirá aglutinar la confianza necesaria a su alrededor, así como capitalizar aprendizajes claves para su sostenibilidad.

Ciertamente, para todo ello se requiere un aparato estatal más eficiente, pues la empresa necesita el concurso del Estado en la prevención o canalización de conflictos sociales; si no, de nada valdrá el nuevo esquema que se plantea. Si bien aún falta mucho por hacer en esta nueva relación empresa-Estado-sociedad, ya hay experiencias exitosas que marcan el rumbo. Ahí se encuentran Antamina en Ancash, Toromocho en Junín o Las Bambas en Apurímac. Como vemos, hay motivos para renovar nuestra confianza. **■**